

de los chacareros más empobrecidos quedó desde 1995 en manos de un inédito Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL). Creado en La Pampa, el MMAL pronto consiguió expandirse a Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Formosa y Córdoba. A través de métodos de acción directa, se las arreglaron para frenar los remates de campos y los desalojos. En 1986 ya había renacido el Movimiento Agrario Misionero y en años posteriores surgieron organizaciones campesinas en provincias en las que no existía una tradición previa, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), fundado en 1989 para resistir los desalojos que venían de la mano de la expansión de la frontera de los agronegocios. En Córdoba, Formosa y Salta hubo iniciativas similares. Por los mismos motivos y también para reclamar por sus tierras ancestrales, diversos pueblos originarios se sumaron a la lucha, especialmente en Salta, Chaco, Neuquén y Formosa.

En estos años hubo también reclamos de magnitud contra la represión institucional, el gatillo fácil o la impunidad. La masacre de Ingeniero Budge (1987) en el Gran Buenos Aires, el crimen de María Solidad Morales en Catamarca (1993) y el asesinato del conscripto Onaui Carrasco en Zapala, Neuquén (1994), fueron algunos de los episodios que generaron movilizaciones masivas. La década del noventa también fue testigo de las primeras por temas de defensa del medioambiente, que involucraron a comunidades enteras. La construcción de la represa de Corpus Christi en el alto Paraná movilizó, a partir de 1995, a la mayoría de la población de la zona misionera que se vería afectada por el anegamiento. Por la misma época comenzó asimismo la resistencia a la minería a cielo abierto. En 1997, la localidad catamarqueña de Belén empezó a organizarse para protestar por las actividades de la mina La Alumbrera, instalada hacía poco tiempo con grandes promesas de obras públicas y fuentes de trabajo que nunca se materializaron. Los primeros en salir al ruedo fueron un grupo de desocupados que, imitando los métodos piqueteros, cortaron los accesos a la mina en demanda de los puestos de trabajo que la compañía había prometido. Para el año 2000, otros sectores sociales se habían sumado al reclamo, que ahora incluía una enérgica denuncia de la contaminación producida por la actividad. En la nueva década, el ejemplo de Belén se multiplicaría en numerosas comunidades a lo largo de toda la cordillera de los Andes, cada una de las cuales organizaría sus propias «asambleas ciudadanas» para frenar la minería a cielo abierto.

Las preocupaciones ecológicas también estuvieron en el origen de una de las más sorprendentes y masivas formas de autoorganización de estos años. Por iniciativa de un pequeño grupo de activistas que promovía la producción orgánica de alimentos, el empleo de fuentes de energía alternativas y el reciclado de los desechos, en 1995, unos veinte vecinos de Bernal, en el sur del Gran Buenos Aires, pusieron en marcha un «Club de Trueque». En reuniones semanales, cada uno llevaba algo de su propia producción o que le sobrara —tartas, empanadas, ropa, artesanías, etcétera— con la idea de intercambiarlo por otros productos sin que mediara dinero. Pronto otros los imitaron y los clubes de trueque fueron atrayendo un número creciente de personas que se habían quedado sin empleo y carecían de dinero. Inventaron luego una «moneda social» propia para facilitar el intercambio indirecto a mayor escala, lo que permitió la expansión de los clubes hasta transformarse en una verdadera red autoorganizada de crecimiento explosivo. Para el año 2000 ya había mil ochocientos nodos en todo el país con más de ochocientos mil participantes, números que llegarían a triplicarse al año siguiente. Mientras el Estado se retiraba y el mercado capitalista colapsaba, una inesperada experiencia de autoorganización social, horizontal y solidaria, proveía una salida real e inclusiva.

La rebelión de 2001

Tras la victoria de Fernando de la Rúa en 1999, toda expectativa de cambio se vio defraudada. Para hacer frente a la agobiante deuda externa con una economía estancada, el presidente tomó otro enorme préstamo del FMI, presentado como un «blindaje», que, sin embargo, se canalizó inmediatamente hacia la fuga de divisas. Las condicionalidades del desembolso implicaron profundizar todavía más el ajuste neoliberal. Además, la coalición de gobierno pronto comenzó a erosionarse, especialmente luego de la escandalosa aprobación, en abril de 2000, de una reforma laboral que recorraba todavía más los derechos de los trabajadores. Según se denunció entonces, varios legisladores habían cobrado sobornos, pagados por el Ejecutivo, a cambio de su voto. El vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez, que a su vez era líder del Frepaso, inició entonces una investigación, pero los senadores radicales y peronistas se abroquelaron para impedirlo. Al ver que el presidente no

lo respaldaba, Álvarez renunció a su cargo. La Alianza quedaba prácticamente deshecha.

En un último intento de paliar la crisis económica, en marzo de 2001, De la Rúa volvió a convocar a Cavallo para que estuviese al frente de las finanzas nacionales. Junto con el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, aprobó un «megacanje» de bonos de la deuda por otros de vencimiento a mayor plazo y tasa de interés más alta, propuesto por un conjunto de bancos internacionales. Era evidente que la operación no iba a servir para paliar la crisis, pero generó en cambio comisiones millonarias para los banqueros que participaron y dejó una deuda pública mucho mayor (considerado la mayor estafa de la historia, dio lugar al procesamiento de todos los involucrados, pero en 2016 los exculpó una polémica decisión judicial). Cavallo también lanzó un plan de «déficit cero» que incluía un recorte del 13% en los sueldos de todos los empleados del Estado y de los jubilados. Las provincias recibieron menos transferencias del Tesoro nacional; varias entraron en una situación crítica y debieron imprimir bonos de emergencia, monedas circulantes de validez local para pagar sueldos; el patacón bonaerense fue la de mayor circulación, pero la mayoría de los distritos tuvieron las suyas.

Previsiblemente, en las elecciones legislativas de octubre la Alianza sufrió una aplastante derrota frente al peronismo. Pero además se produjo entonces un hecho inédito: un 22% de los ciudadanos optaron por el «voto bronce», es decir, votaron en blanco o anularon su voto, y otro tanto se abstuvo de ir a votar. Fue su forma de manifestar la pérdida de confianza en los políticos, cualquiera fuese el partido al que pertenecieran. A la crisis económica se sumaba ahora una crisis de legitimidad no solo del gobierno, sino de la totalidad del sistema político. Para ayudar a los bancos frente a la estampida de retiro de depósitos —las empresas y los más ricos se los llevaban al exterior y los pequeños ahorristas los ponían a resguardo bajo sus colchones—, a comienzos de diciembre Cavallo implementó el famoso «corralito», que limitó a un mínimo la cantidad de dinero que se podía extraer de las cuentas bancarias. Pero nada de eso fue suficiente. Cuando el FMI anunció que suspendía los desembolsos para el país, el sistema financiero colapsó completamente.

Fue la peor crisis económica de toda la historia argentina, la conclusión de años de medidas neoliberales. Por sus efectos, un 54% de la población cayó pronto bajo la línea de pobreza (un 27% bajo la línea de

indigencia) y la tasa de desocupación superó el 20%. Miles de personas de clases populares o de sectores medios empobrecidos quedaron en total indefensión; muchas consiguieron sobrevivir gracias a los clubes de trueque (quienes participaban entonces llegaron a proveerse a través de ese sistema de hasta un 40% o más de sus necesidades cotidianas). Otros nutrieron un impresionante ejército de cartoneros que todas las noches recorría la ciudad y los basurales en busca de reciclables para vender.

La catástrofe, sin embargo, potenció reacciones de resistencia y solidaridad que produjeron un giro inesperado en la política nacional. Durante diciembre, los reclamos de los diversos sectores afectados se fueron entrelazando rápidamente en una trama que daría lugar a una rebelión masiva y duradera, con pocos parangones en la historia nacional. El 12 de diciembre miles de piqueteros cortaron rutas en el Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Mar del Plata exigiendo la renuncia del presidente y de Cavallo, mientras trabajadores estatales, docentes, taxistas, estudiantes y otros desarrollaron diversas acciones de protesta por todo el país. El mismo día, por la tarde, se realizó una masiva manifestación de comerciantes minoristas en la capital y otras ciudades. Como el «corralito» había inmovilizado también los sueldos de los trabajadores, las dos facciones de la CGT y la CTA decretaron un paro general el 13 de diciembre para exigir el fin de esa medida. A la huelga se plegaron comerciantes y gremios de sectores medios. Numerosas marchas se sucedían por todas partes, algunas con graves enfrentamientos con la policía. A estas formas de protesta se sumaron, a partir del día 14, los saqueos, que se extendieron por once provincias. Al finalizar la oleada, se contaron dieciocho muertos a manos de la policía o de los dueños de comercios y cientos de heridos. Aunque los saqueos fueron una reacción popular genuina —hacía tiempo que eran parte del repertorio de formas de lucha defensiva de las clases populares—, en varios casos se documentó la complicidad de referentes políticos barriales y de la policía, que se retiró de los lugares señalados o incluso participó del asalto a los comercios.

El 19 de diciembre de 2001, la situación tomó un giro inesperado. Por la noche, luego de un discurso de De la Rúa en el que anunció el estado de sitio y ninguna solución para la crisis, grupos de vecinos de Buenos Aires comenzaron a golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Llegadas las diez de la noche, cientos de miles de personas

golpearan sus caceroles en una extraña sinfonía de protesta. Nadie traía carteles políticos; los que intentaron desplegar alguna pancarta fueron obligados a guardarla. Reunidos en los principales puntos de la ciudad, muchos marcharon hasta Plaza de Mayo a medianoche. Miles de personas protagonizaron hechos similares en Rosario, Paraná, Tucumán y otros puntos del país. Desconcertado, el presidente pensó en aplacar la furia popular con el anuncio de la renuncia de Cavallo. Pero eso no fue suficiente. Cuando, por la mañana del día siguiente, el gobierno ordenó reprimir a los manifestantes que habían permanecido frente a la Casa Rosada desde la noche anterior, una multitud rodeó la Plaza de Mayo. Tras varias horas de combates con la policía, De la Rúa finalmente decidió renunciar. Simultáneamente se habían producido manifestaciones en Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Neuquén y otros sitios. La represión durante esas jornadas dejó al menos treinta y ocho muertos en diversos puntos del país, cinco de ellos en Plaza de Mayo.

Aunque algunos quisieron interpretarla como una «revuelta de clase media» porteña motivada por el «corralito», se trató más bien de una rebelión popular plural y múltiple en su composición social. Formó parte de una trama de acontecimientos protagonizados tanto por sectores medios como por clases populares en todo el país. «¡Que se rayan todos, que no quede ni uno solo!» —una consigna *política* y no económica—, fue la frase principal que unificó a los que participaban en la rebelión. Varias decenas de manifestaciones, escraches, cortes de ruta, caceroles y puebladas que hubo desde diciembre de 2001 fueron protagonizadas por la misma diversidad de grupos sociales. En sus consignas y demandas con frecuencia se combinaban las aspiraciones de cada uno. Podían exigir el fin del corralito, pero también el pago de sueldos atrasados y mayores subsidios para desocupados. Se preocupaban por las dificultades financieras de los comerciantes y pequeños productores, pero también por la defensa de la salud y la educación pública. Tales demandas pronto se entrelazaron con otras más generales y estructurales: del universal odio a los bancos se pasó al cuestionamiento de las multinacionales, las empresas de servicios públicos privatizadas o las políticas neoliberales impulsadas por el FMI.

Por todas partes el malestar se tradujo en la exigencia de la renuncia de las autoridades. La multitud en las calles exigió también la renuncia de la Corte Suprema y protestó incluso contra Canal 13, luego de que este y otros medios de comunicación decidieran no transmitir

noticias sobre uno de los principales caceroles de esos días, en un intento de aportar a la desmovilización. Los tres poderes del Estado, las empresas y los bancos, los organismos financieros internacionales, los medios de comunicación: la movilización apuntaba contra los principales pilares del orden social.

El año que siguió a la rebelión fue testigo de formas inéditas de autoorganización, lucha y solidaridad. El peor momento de la crisis despertó en parte de la población los mejores instintos de cooperación, creatividad y vocación por lo público; fueron tiempos extraordinarios. Gente sin experiencia política junto con otra que sí la tenía protagonizaron formas de acción directa de radicalidad inédita: escraches contra los políticos, tomas de edificios, ataques a multinacionales, cortes de rutas. Los bancos porteños debieron operar durante un año con sus ventananas tabicadas debido a los frecuentes ataques de los ahorristas. Los más activos eran, sin dudas, una minoría, pero vista con simpatía por una amplia porción de la sociedad. Inmediatamente luego de la caída de De la Rúa, y mientras se sucedían vertiginosamente varios presidentes provisionales, comenzaron a surgir «asambleas populares» de manera espontánea en diferentes ciudades del país. Solo en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano llegó a haber cerca de ciento cincuenta. Durante todo 2002 demostrarían una enorme vitalidad: llamaron a la realización de decenas de caceroles masivos, discutieron la manera de reemplazar a los políticos profesionales por formas de democracia directa, exploraron salidas económicas para la crisis y establecieron fuertes lazos de solidaridad con otros movimientos sociales, como el de los piqueteros y el de empresas recuperadas, que por entonces tuvieron también un gran florecimiento.

La voluntad de confundirse en una misma rebelión a pesar y más allá de las diferencias sociales tuvo manifestaciones conmovedoras. El 28 de enero, por caso, se realizó una multitudinaria marcha conjunta de las organizaciones piqueteras hacia Plaza de Mayo. La marcha recibió la adhesión y solidaridad de las asambleas porteñas y miles de personas de sectores medios aplaudieron el paso de las columnas de los pobres por el centro de la ciudad. La multitud mezclada corrió ese día «¡Piquete y caceroles, la lucha es una sola!». Y no se trataba tan solo de una expresión de desoos: en esos tiempos extraordinarios hubo intensos contactos y luchas conjuntas entre gente de sectores medios empobrecidos, obreros y desocupados. Había la sensación de que una «nueva política», como se decía entonces, se asomaba en el horizonte.

Los efectos de 2001 y la salida de la crisis

Las novedades llegaron, aunque de modos inesperados. La compleja combinación de las presiones y expectativas populares, los condicionamientos económicos locales e internacionales y los reacomodamientos del sistema político abrieron un tiempo imprevisible que alumbró nuevas identidades y fuerzas políticas, ascensos rutilantes de dirigentes nuevos (y caídas no menos espectaculares) y medidas de gobierno anteriormente impensables. El Frepaso prácticamente desapareció y la UCR entró en un largo declive. Muy desacreditado, el PJ se fragmentó y, por un tiempo, no estuvo en condiciones de definir un liderazgo. Con el sistema de partidos tradicionales así desarticulado, se abrieron oportunidades para que nuevas fuerzas aspiraran a ocupar cargos de gobierno o para el encumbramiento de dirigentes que anteriormente no tenían peso propio.

Desde el 20 de diciembre y durante los siguientes once días se sucedieron cinco presidentes. Tras la caída de De la Rúa asumió provisionalmente el presidente del Senado y convocó raudamente a la Asamblea Legislativa, la que eligió como nuevo mandatario al peronista Adolfo Rodríguez Saá, por entonces gobernador de San Luis y sin ninguna proyección nacional. La masiva reacción popular que se produjo cuando el puntano designó como funcionario a un antiguo menemista de notorios antecedentes de corrupción, junto con la falta de apoyo de otros referentes del PJ, produjeron su caída tras apenas siete días de gobierno. En ese breve lapso, sin embargo, tomó una medida crucial: ante un Congreso que lo aplaudía entusiasta y entre discursos antitimperialistas, declaró la suspensión unilateral de los pagos de la deuda externa. La escena era impensable unas pocas semanas antes: la Argentina entraba en *default* y para consternación de los intereses financieros internacionales, lo hacía con orgullo. Tras su renuncia intempestiva, y luego de otro brevísimo interinato, el 2 de enero la Asamblea Legislativa ungió como nuevo presidente a Eduardo Duhalde, hombre fuerte del peronismo bonarense, sin embargo apoyado por una mayoría multipartidaria. De la Rúa le había sacado diez puntos en la carrera por la Casa Rosada dos años antes y ahora, con incluso menos simpatías populares, el Congreso lo habilitaba a asumir el mando.

En medio del colapso económico y con los movimientos sociales ocupando las calles, Duhalde se vio obligado a tomar una serie de

decisiones que no habría adoptado en otro contexto. La convertibilidad quedó oficialmente derogada con una devaluación del 40%, acompañada de la «pesificación asimétrica» de los depósitos y deudas denominados en dólares. Se los convertiría compulsivamente a pesos, pero de un modo que no hacía recaer el costo totalmente sobre los más débiles: los deudores pagarían un peso por cada dólar adeudado, pero los bancos debían reconocer \$1,40 por cada dólar de los ahorristas. Para favorecer a los bancos, el FMI proponía que se apelara a una «hiperinflación controlada» que licuara totalmente el valor de los contratos pesificados, pero ese camino era políticamente inviable. La devaluación se trasladó a los precios, pero la inflación no se salió de control y pronto volvió a niveles relativamente bajos.

Duhalde decretó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y además reintrodujo retenciones por las que el Estado se quedaría con una parte de las ganancias de algunos sectores exportadores, especialmente los del agro. Con los fondos disponibles por esa medida, por la moratoria de la deuda externa y por créditos de urgencia que otorgaron agencias internacionales, se puso en marcha un gigantesco programa de subsidios para los desocupados. Mientras que en diciembre de 2001 apenas el 1% de la población recibía ayuda estatal, ahora el porcentaje se extendió a más del 6%, lo que significó que 2.500.000 personas recibieran un subsidio. Los empresarios y organismos internacionales tuvieron que dejar pasar estas medidas sin oponer sus resistencias habituales, por miedo a echar fuego al descontento popular.

A fines de 2002, el reordenamiento financiero permitió poner fin al «corralito» bancario y discontinuar el uso de cuasimonedas en las provincias. Mientras tanto, el aumento del consumo, el fin del drenaje de fondos hacia el exterior, los altos precios internacionales de la soja y la disminución de las importaciones por efecto de la devaluación generaron una reactivación. La situación económica comenzaba a descomprimirse. Pero quedaba aún la crisis política. La enorme masa de subsidios que se repartió durante 2002 fue casi totalmente gestionada a través de los municipios, lo que puso en manos del aparato clientelar peronista una fabulosa herramienta para restaurar su dominio. En poco tiempo el PJ recuperaría parte del poder que había perdido a manos de los nuevos movimientos sociales y volvería a ocupar su lugar como el partido más poderoso de la política nacional. Conservaba, sin embargo, un gran prestigio y arraigaba dificultades para superar sus divisiones internas,

En un intento de recuperar el control de la calle, en junio de 2002, el gobierno realizó un ensayo represivo. En ocasión de un corte en un puente de acceso a la ciudad de Buenos Aires, la policía montó un escenario para justificar un feroz ataque a las organizaciones piqueteras de tendencia más autónoma, que terminó con dos jóvenes muertos —Maximiliano Kosteki y Darío Santillán— y numerosos heridos. Con la ayuda de los principales diarios y canales de televisión, se intentó convencer a la ciudadanía de que las muertes habían sido producto de enfrentamientos entre los propios piqueteros. Pero las fotografías de los hechos demostraron la farsa y una enorme reacción de protesta puso fecha de vencimiento al gobierno. Duhalde se vio forzado a adelantar la convocatoria a elecciones generales y a autoexcluirse de la posibilidad de ser candidato. Esperaba que los comicios, fijados para abril de 2003, ayudarían al sistema político a recobrar algo de su legitimidad.

El problema era que, sin una candidatura de Duhalde, no estaba claro quién podría liderar al PJ. Ningún referente se perfilaba con posibilidades, por lo que existía el riesgo de que su archienemigo Carlos Menem fuera quien representara al partido de cara a los comicios. Menem tenía un enorme desprestigio, lo que adelantaba una derrota segura, pero conservaba un apoyo suficiente como para triunfar en elecciones internas frente a otras figuras ignotas.

Ante un escenario así de complicado, Duhalde suspendió las internas e impuso un cambio en las reglas electorales que permitió que varios candidatos se presentaran bajo el sello del PJ. En la contienda se anotaron así Menem, Rodríguez Saá y Néstor Kirchner, hasta entonces un desconocido político de Santa Cruz. Duhalde había tratado de tentar al gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, que tenía buenas chances. Pero ante la negativa, dio su aval al paragonico.

Llegadas las elecciones, los tres candidatos peronistas compitieron entre sí, y con Ricardo López Murphy —un economista liberal que el *establishment* consiguió instalar rápidamente con ayuda de los medios de comunicación— y Elisa Carríó, una ex radical que había fundado poco antes el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI), por entonces de orientación centrozquierdista. Algunos movimientos sociales llamaron a la abstención, pero para entonces la demanda de regreso a la «normalidad» venía cerrando vertiginosamente la ventana al cambio que se había abierto en 2001. La ciudadanía concurreó a las urnas sin entusiasmo y en la primera vuelta el voto se dividió entre todos los candidatos,

En primer lugar quedó Menem, pero con apenas algo más que el 24%. En el segundo, Kirchner, que había conseguido el 22% con una campaña con eje en la crítica al neoliberalismo. Los otros tres contendientes obtuvieron entre 16 y 14% cada uno. La UCR también presentó candidato, pero obtuvo un porcentaje cercano a lo irrelevante, 2,34%, otro índice del descalabro de los partidos tradicionales. La izquierda, sumadas sus diversas agrupaciones, quedó por debajo de esa cifra.

De cara al balotaje, se hizo evidente que los votos obtenidos por Menem eran su techo. Decenas de organizaciones y referentes de todo el país llamaron a votar a Kirchner, menos por aprecio al candidato que para bloquear un tercer mandato del riojano, que venía con la promesa de una dura represión y un regreso a políticas de ajuste ultraliberal que incluían acaso la dolarización total por abolición de la moneda nacional, un camino drástico que Ecuador había tomado en 2000 y que Menem había deslizado como posibilidad.

Ante la perspectiva de perder en segunda vuelta por una abrumadora diferencia —las encuestas hablaban de 70% para su continuante— Menem decidió retirar su candidatura. Así llegaba a la Casa Rosada, con apenas el 22% de los votos, alguien virtualmente desconocido al comienzo de la campaña, que ni siquiera había conseguido la representación de todo su partido. Otro efecto inesperado de 2001.

El surgimiento del kirchnerismo (2003-2007)

Al asumir Kirchner, la economía estaba iniciando una incipiente recuperación, que en los años siguientes se consolidó de manera sorprendente: durante su mandato la inflación se mantuvo en niveles bajos y el PBI creció entre 8 y 9% cada año. Ya en 2005, la producción recuperó el nivel de 1998, antes de la crisis, y seguiría aumentando por la siguiente década. Sus motores fueron la industria orientada al mercado interno, la exportación automotriz a Brasil, y de *commodities* industriales (acero, aluminio) y productos agrícolas (en particular, la soja, muy consumida en los mercados asiáticos).

Los pilares que permitieron ese desempeño fueron los establecidos luego de la caída de De la Rúa, en buena medida para apaciguar el descontento: el superávit fiscal (engrosado por las retenciones y el no pago de la deuda), la expansión del consumo (favorecida por el gasto social)